



1. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\*\* presentó demanda de amparo indirecto vía electrónica, el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en contra de las autoridad y acto siguiente:

**Autoridad Responsable**

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

**Acto Reclamado**

La resolución de fecha 26 de abril de 2023 dictada en autos del recurso de revisión número \*\*\*\*\* por el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

2. El veintiocho de abril de dos mil veintitrés, el Juez Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien por razón de turno tocó conocer de la demanda, la registró con el número \*\*\*/2023 y la admitió; fijó fecha para la audiencia constitucional, requirió el informe justificado, entre otros.

3. Seguido el juicio de amparo por sus trámites legales, previo diferimiento, el veinte de junio de dos mil veintitrés se celebró audiencia constitucional y el quince de agosto siguiente, se dictó resolución con el siguiente punto resolutivo:

**ÚNICO.** La Justicia de la Unión **no ampara ni protege a \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*** \*\*\*\*\* , por los motivos expuestos en el **último** considerando de esta resolución.

4. Inconforme con tal determinación, el quejoso, mediante escrito presentado electrónicamente el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, interpuso recurso de revisión.

**II. TRÁMITE DEL AMPARO EN REVISIÓN**

5. Por razón de turno tocó conocer del presente recurso a este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer

















reconoce que la “\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* ”.

realiza actos de autoridad y recibe recursos públicos al cobrar por la distribución del agua y señala que el “ITEI” en el acuerdo referido en el agravio anterior y que tiene obligaciones de transparencia, el juzgador insiste que en las mismas deben circunscribirse a las actividades que realiza como organismo privado operador del agua, de acuerdo con los artículos 23 y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8, 22 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (párrafos del 76 al 80 de la sentencia), lo que es incorrecto y constituye una indebida interpretación de los preceptos invocados.

- 27.** El artículo 23 de la ley general invocada señala que es sujeto obligado cualquier persona moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.
- 28.** Por su parte el artículo 70 prevé el catálogo de toda la información que los sujetos obligados deben poner a disposición de la ciudadanía, sin hacer distinciones de información dependiendo de la calidad del sujeto obligado (autoridad o privado), pues son obligaciones comunes hacer pública toda la información prevista en el dispositivo.
- 29.** Que, el numeral 81 (no invocado por la responsable) se refiere a las obligaciones de transparencia de los particulares que reciben recursos públicos y ejercen actos de autoridad y solo señala que los organismos garantes, en este caso el “ITEI” determinarán qué personas privadas ejercen actos de autoridad o reciben recursos públicos y deben ser considerados como sujetos obligados, y precisarán si deben cumplir con las obligaciones de transparencia







información debe ser completa, verificable y veraz. De nuevo, con el mecanismo que el Juez y el "ITEI" pretenden que prevalezca es imposible cumplir con esos principios, ya que ni el propio organismo garante tendría acceso a la información del sujeto obligado a fin de saber si la que proporciona es la correcta.

- 37.** Es por eso, el inconforme dice, que la ley general no realiza distinciones ya que ellas llevarían al absurdo de conferir facultades a los sujetos obligados de entregar la información y datos que ellos quieran. Si la asociación obligada decidió dedicarse a la prestación de un servicio público debe sujetarse a las normas de transparencia, no puede ahora tratar de salvaguardar sus datos escudándose en el derecho privado si de forma voluntaria, sin que nadie la obligara, decidió sustituir al Estado en la distribución y cobro del agua, porque los ciudadanos tienen derecho de saber cómo está operando ese servicio, con quiénes; quiénes son los socios que pertenecen a la asociación, sus trabajadores, etcétera, dado que tiene derecho de conocer la información contemplada en el artículo 70.
- 38.** Que, el artículo 11 de la ley general indica que toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública, debe ser completa, oportuna y accesible y que los regímenes de excepciones deben estar previstos en la ley, ser legítimos y necesarios en una sociedad democrática. Que, en el caso la ley general no prevé excepción, por lo que la previsión de la ley estatal resulta ilegal, por lo que de considerarse como válida la excepción contenida en la ley estatal no sería legítima ni necesaria, puesto que crea una esfera de opacidad que depende de la voluntad del propio sujeto obligado sin que pueda ser revisado, lo que impide que se cumplan los demás principios de transparencia.
- 39.** Por ello, dice, la interpretación que realizó el Juez es incorrecta. El





*estatales o municipales, o realicen actos de autoridad, sólo respecto de la información pública relativa a dichos recursos; b. Para efectos de esta Ley tendrán calidad de autoridad las personas físicas o jurídicas que realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten derechos de particulares y cuyas funciones estén determinadas por una ley o reglamento”.*

42. El disidente insiste que la interpretación de la primera parte debe hacerse en consonancia con los principios de transparencia a fin de hacer operativo el derecho de acceso a la información y no dejar que sean los propios sujetos obligados los que unilateralmente y sin revisión decidan qué información entregan.
43. Sin embargo, asevera, también es preciso señalar que ese apartado se refiere únicamente a los recursos, no a las demás obligaciones contenidas en los catálogos del artículo 70 de la ley general y 8 de la ley estatal. En esos catálogos no se habla solo de recursos, sino de estructura, directorios, trabajadores, etcétera. Todo lo cual debe ser entregado sin poder acudir al argumento de que no se emplea para el servicio público, pues la ley no excepciona al sujeto obligado de la entrega de la información, sino que solo se refiere a los recursos públicos, al dinero pues, pero no a los demás datos. En el caso se solicitó el nombre y emolumentos de los trabajadores, por lo que no se estaría en el caso de excepción. El apartado debe interpretarse de esa manera a la luz del principio de máxima transparencia y no hacerse extensivo a cuestiones no previstas.
44. Pero, el recurrente continúa diciendo, más importante, el segundo apartado de la fracción establece que las personas jurídicas que realicen actos de autoridad y afecten derechos de particulares tendrán la calidad de autoridad, siempre que sus funciones estén determinadas por una ley o un reglamento. Este apartado supera al













- Añade, que las cuotas que cobra dicha asociación por la prestación del servicio público de agua potable tienen la naturaleza de recursos públicos, de conformidad con lo que establecen los artículos 5, 132, fracción V y 157 de la Ley de la Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 2, fracción XV, 3, 8, 9 y 10, fracción I, 12, fracción V, 13, fracción III, 97 y 101 bis de la Ley del Agua del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que al prestar el servicio público de distribución y suministro de agua forma parte del Sistema Estatal del Agua, que es de interés público.
- Agrega, que las cuotas y tarifas que cobra (la asociación) están sujetas a la ley y deben considerarse como recursos públicos que recauda en ejercicio de la concesión otorgada por el ayuntamiento, pero sin que pierdan ese carácter debido a que se trata de recursos obtenidos por un servicio público, por lo que se encuentra obligada por la ley de transparencia en términos de lo que establece el artículo 10, fracción I, de la Ley del Agua del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Suma, que es irrelevante que los recursos pasen o no de forma directa por las arcas municipales, ya que lo importante es la naturaleza del ingreso, que se obtiene por un servicio público que debe prestar el ayuntamiento y que concesionó a un particular (\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* ), por lo que si el artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios contiene el catálogo de sujetos obligados, y en su fracción XXII señala que lo son aquellas personas físicas o jurídicas privadas que recauden, reciban, administren o apliquen recursos públicos estatales o municipales, o realicen actos de autoridad, lo que ocurre en el caso.
- Pues sostiene que a la persona jurídica citada, la responsable ya la reconoció que realiza actos de autoridad, por lo que es un sujeto obligado al recaudar, administrar y aplicar recursos públicos, por lo que la información que solicita encuadra en el principio de máxima publicidad, considerando que la ciudadanía tiene derecho de conocer quiénes le están prestando el servicio de agua potable, quiénes son los propietarios

o asociados de la empresa respectiva, cuánto cobran, qué empleados tienen, dado que presta un servicio público fundamental, pues el acceso al agua tiene rango de derecho humano; en consecuencia, una interpretación restrictiva, tratando de obstaculizar la rendición de cuentas de esa clase de organismos, como la que realizó la responsable, resulta inconstitucional.

- Adiciona, que tiene obligación de transparentar su nómina completa, incluyendo nombres de las personas que laboran allí y de los asociados, pues finalmente se trata de personas que prestan un servicio público en favor de la ciudadanía, por lo que al tratarse de información pública fundamental no resulta aplicable el artículo 3.1, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, ni se requiere consentimiento para publicar datos de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Refiere, que incluso la propia asociación proporcionó los nombres de algunos empleados, reconociendo su obligación de hacerlo; sin embargo, considera que no existe disposición que la autorice a distinguir respecto de unos y otros, por lo que está obligada a proporcionar la información de todos los integrantes y operaciones de la asociación tercera interesada y no limitarla a aquellos trabajadores que prestan el servicio de agua potable de aquellos que no lo hacen, en la medida que no es posible escindirse para conservar su naturaleza de sujeto obligado solo en parte.
- Sostiene, que no es posible para la ciudadanía corroborar que la información que ese sujeto obligado envíe se refiera efectivamente a la relativa al servicio público que presta, pues será el propio sujeto el que envíe discrecionalmente la información impidiendo corroborar si hay otras personas que realicen esa clase de labores, pues para la prestación de un servicio de esa naturaleza se requieren, además, de los operadores de tuberías y pipas, secretarias, contadores, personal de cobranza, directivos; de ahí que su estructura para prestar el servicio no se limite al personal operativo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

- Lo considera así, ya que la ley de transparencia no prevé que un sujeto obligado lo sea solo de forma parcial, pues cuando una persona se ubica en uno de los supuestos de transparencia queda obligado respecto de toda su operación y todo su personal, de ahí que se equivoque la responsable al sostener que las obligaciones de transparencia de la asociación son acotadas al servicio de agua, o que no tenga obligación de proporcionar sus actas de asamblea, pues éstas también constituyen información pública al estar relacionadas con la constitución de la asociación, sus cambios de directivas, su representación y demás datos que permiten a la ciudadanía el acceso a información relativa a una persona que presta un servicio público.

- 60.** Para atender a lo alegado, el Juez de Distrito transcribió el contenido de los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que, dijo, se advertía que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión y que para su ejercicio cualquier autoridad se regirá por el principio y la base de que toda la información en posesión de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes y en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
- 61.** Que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes y que aquella autoridad que vaya a emitir un acto de molestia a la esfera jurídica del gobernado debe respetar la garantía de legalidad que pone a salvo al gobernado de todo acto arbitrario.

62. El Juez precisó que la eficacia jurídica del derecho fundamental de legalidad establece un sometimiento de la autoridad al imperio de la ley, no debe olvidarse que mientras los particulares pueden hacer todo aquello que no les esté prohibido, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; de lo que se sigue, que dentro del sistema constitucional que nos rige ninguna autoridad puede dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un precepto de la ley, en virtud de que las autoridades no tienen más facultades que las que expresamente las normas generales les confiere, es así como se preserva el orden jurídico que se vería conculcado si las autoridades al emitir actos que produzcan una transgresión a los derechos subjetivos del gobernado, incumplen con la garantía de legalidad.
63. Que todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
64. El Juez de Distrito señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el derecho de acceso a la información consagra como regla general que toda la información que se encuentre en poder de la autoridad es pública; sin embargo, el texto constitucional reconoce ciertos principios y derechos fundamentales que operan como excepciones a la regla general, dando lugar a que la información pueda reservarse o considerarse confidencial en ciertos supuestos que, siguiendo los lineamientos constitucionales, deben estar previstos en ley, para lo que la propia legislación establecerá excepciones a las excepciones, es decir, supuestos en





forma análoga, la tesis del Pleno del Más Alto Tribunal P. XLV/2000 y P. LX/2000 y concluyó que era lógica su limitación por los intereses nacionales y los derechos de terceros.

69. Que en cumplimiento al mandato constitucional y de conformidad con los lineamientos reconocidos por el Tribunal Pleno para tal efecto, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (abrogada) establecía dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de “información confidencial” y el de “información reservada”. Para proteger la vida privada y los datos personales –considerados como uno de los límites constitucionalmente legítimos– el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de “información confidencial”, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización.
70. Lo anterior también, dijo, tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en: (i) el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales – así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos– debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; y (ii) la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales.
71. Que, de ese modo, existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales. Por lo anterior, el acceso público –para todas las



información reservada.

76. El Juez Federal destacó que también el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció en la jurisprudencia P./J. 54/2008, el doble carácter del derecho de acceso a la información, como un derecho en sí mismo, pero también como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. Que, en ese sentido, el Tribunal Pleno destacó que el derecho de acceso a la información es la base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo cual se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho.
77. Enseguida, el Juez de Distrito acudió a los artículos 3, fracción XII, 23, 70 y 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los diversos 8, fracción V, inciso m), 22, numeral 2 y 24, fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 5, 132, fracción V y 157 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; los numerales 2, fracción XV, 3, fracción I, 8, 9 y 10, fracción I, 12, fracción V, 13, fracción III, 97 y 101 bis, de la Ley de Agua del Estado de Jalisco y sus Municipios; los preceptos 1.4, y 3.1, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, los que reprodujo.
78. Luego, precisó que de esas legislaciones se observaba que por información de interés público se entiende a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

lo cuales deben proteger los datos personales que obren en su poder, que son cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y Municipal.

- 79.** Que cada Estado de la República Mexicana contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas, entre otras, los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.
- 80.** También señaló que el organismo encargado de transparencia y acceso a la información, dentro de su respectiva competencia, determinará los casos y el listado en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.
- 81.** Que no se requiere autorización del titular de la información confidencial para proporcionarla a terceros cuando, entre otros





como los artículos 1º párrafo 2, 6º y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (...) TERCERO. Como Sujeto obligado indirecto, la \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* será responsable en relación a la información pública  
relativa a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,  
saneamiento y disposición de aguas y lodos residuales, en el Fraccionamiento referido;  
para ello proporcionará al sujeto obligado que le otorgó dicha concesión, el informe  
sobre su ejercicio. (...)”.

- El 24 de octubre de 2022, el quejoso presentó una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que solicitó al Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, información relativa con el organismo operador privado del sistema de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas y lodos residuales del Municipio de Zapopan, denominado \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , consistente en la totalidad del número de trabajadores que emplea, sus puestos, salarios, nombres, horarios y copia de las asambleas ordinarias y/o extraordinarias celebradas en el 2004 y 2005.
- La respectiva área de transparencia y acceso a la información pública del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, dio respuesta a dicha solicitud, la que resultó negativa, bajo el argumento de que se tratan de datos de carácter confidencial porque los servicios no son pagados con recurso público.
- Contra esa negativa, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual se registró con el número \*\*\*\*\*; se admitió el 11 de noviembre de 2022 y el 26 de abril de 2023 resolvió que si el 27 de agosto de 2020, el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, concesionó el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas y lodos, esto, a favor de la \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* , se le dictaminó como un sujeto obligado indirecto que tiene el deber de proporcionar la información relacionada con tal concesión, tal como lo señaló en el acuerdo \*\*\*\*\*  
de 14 de octubre de 2020, donde se estableció la forma en que dicha asociación tendría que cumplir con sus obligaciones en materia de acceso e información pública.





prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas y lodos.

- Además, determinó que existía una colisión entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales, por lo que en atención a lo que prevé el artículo 149 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizó una ponderación para la entrega de los nombres, puestos y salarios de las personas que contribuyen en la prestación del servicio público concesionado, de la siguiente manera.
- Por lo que respecta a la idoneidad de la revelación de dicha información, se permitirá tener certeza jurídica respecto a la plantilla del personal que se destina para la prestación del servicio público concesionado, así como respecto a la pertinencia de los puestos destinados para tal efecto y la identificación de los nombres de las personas físicas que ejecutan actos de autoridad en representación del sujeto obligado indirecto (lo que hace las veces de servidores públicos) todo esto, con motivo de la concesión de dicho servicio público, además que se da cuenta de la percepción general que cada una de esas personas recibe por la realización de los actos inherentes a los puestos creados para la prestación del multicitado servicio público.
- En lo que atañe a la necesidad de la revelación de dicha información, la considera necesaria para crear certidumbre respecto a las acciones que emprende el sujeto obligado indirecto para la prestación del servicio público concesionado y con ello, dar cuenta del cumplimiento de los términos de la concesión otorgada por el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; es decir, resultara necesaria para dar cuenta respecto al debido cumplimiento de los términos en los que dicha concesión fue otorgada.
- En lo relativo a la proporcionalidad, dijo que el requerimiento de entrega de información resultaba proporcional ya que se trata de información útil para que la sociedad comprenda las actividades que lleva a cabo el sujeto obligado indirecto para la prestación del multicitado servicio público concesionado y que con ello, se emprendan, en su caso, las acciones que se consideren pertinentes para la permanencia, mejoría o



revocación de dicha concesión; máxime que se contribuye a la rendición de cuentas de los actos que ejecuta el sujeto obligado indirecto con motivo de la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas y lodos.

- Asimismo, determinó que las asambleas ordinarias y extraordinarias de 2004 y 2005 escapaban también de los alcances previstos dentro del acuerdo \*\*\*\*\*, ya que de éste se desprende que dichas actas no se relacionan con el carácter de sujeto obligado indirecto que le fue atribuido por el Pleno de ese Instituto, es decir, no se relacionan con la prestación del servicio público concesionado, por lo que no estaba obligada a proporcionarlas, de ahí que confirmó su confidencialidad.
- Añadió, que de existir dichos documentos en resguardo del Registro Público de la Propiedad, la parte recurrente (quejoso) tiene derecho a presentar solicitud de información pública a Coordinación General de Transparencia, esto, con la finalidad de obtener respuesta relacionada con los soportes documentales que al respecto sean de su interés; ya que, tales asambleas resultan inexistentes dentro del Ayuntamiento de Zapopan, esto, de conformidad a lo establecido por el artículo 86 bis, numeral 2, de la ley de la materia, pues, dicha asociación está constituida como asociación civil, no así de una asociación vecinal, por lo que dichos documentos no han sido entregados al Ayuntamiento o bien, requeridos por éste último.
- Por lo que modificó la respuesta de la \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, y la requirió para que entregue los nombres, puestos y salarios de los trabajadores dedicados a la prestación del servicio público concesionado multicitado.

**86.** Luego, el resolutor dijo que era necesario citar las consideraciones establecidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 56/2011, las que transcribió y señaló que derivaron las tesis aisladas P. I/2014 (10a.) y P. II/2014 (10a.), de rubros: *“PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE*

ARLING JOAHKASTIA LÓPEZ CAMACHO  
70f6a6620f636a663200  
1505226 1800000





residuales del Municipio de Zapopan, Jalisco.

- 92.** Lo que se corrobora, el Juez puntualizó, con lo previsto por el artículo 8, fracción V, inciso m), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en donde se constata que es información fundamental obligatoria para todos los sujetos obligados, la información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende el listado de personas físicas o jurídicas a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.
- 93.** Además, que el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios estatuye que no se requerirá autorización del titular de la información confidencial para proporcionarla a terceros cuando entre otras, se relacione con el otorgamiento de estímulos, apoyos, subsidios y recursos públicos, lo que en el caso, así lo determinó la responsable, pues requirió a la asociación para que entregue los nombres, puestos y salarios de los trabajadores dedicados a la prestación del servicio público concesionado.
- 94.** Aunado, el resolutor de amparo precisó, que el artículo 1.4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios prevé que cualquier persona jurídica que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal serán responsables de los datos personales; de ahí que la \*\*\*\*\* \*\*  
 \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* solo deba otorgar la información inherente a la prestación del servicio de agua potable,



aqueellos aspectos personales y/o familiares que se desea mantener fuera del conocimiento de los demás, y si bien no puede atribuirse tal "espacio íntimo" a personas jurídicas colectivas; sin embargo, esto no se traduce en que determinada información de esta clase de personas no pueda considerarse privada o confidencial y, por ende, negarle protección constitucional frente a la intromisión de terceros.

98. Ello, porque, como lo precisó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la noción de lo "privado", como derecho estrechamente vinculado con la naturaleza del ser humano, se relaciona con: a) lo que no constituye vida pública; b) el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; c) lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; d) las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; y, e) aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos.
99. Por tanto, que en la especie, la obligación de transparentar la totalidad del número de trabajadores que emplea la asociación multicitada, sus puestos, salarios, nombres, horarios y copia de las asambleas ordinarias y/o extraordinarias celebradas en el 2004 y 2005 no constituyen vida pública y escapan de aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos, pues con este carácter solo actúan las personas que están relacionadas a la prestación del servicio público concesionado.
100. Que, es consecuencia, como lo consideró el Máximo Tribunal del País, las personas morales, como tales, sí cuentan con determinados espacios, como su domicilio y sus comunicaciones, o bien, con ciertos datos económicos, comerciales o inherentes a su identidad que, de suyo, sí deben estar protegidos frente a intromisiones ilegítimas; de ahí que afirmó que los bienes que





103. Esto, porque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el artículo 24, fracción XXII, sí prevé la información que solo será pública, que es toda la relacionada a recaudar, recibir, administrar o aplicar recursos públicos y lo que no corresponda a recursos públicos, será información reservada.

104. Incluso, que de la interpretación del artículo 81 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se constata que los organismos garantes (Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco) precisan de qué forma y la información que deberán proporcionar las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, que puede ser un sujeto obligado directo (Ayuntamiento del Municipio de Zapopan, Jalisco) o indirecto (\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*) , a quien a este último el sujeto obligado directo le dio la calidad de Organismo Operador Privado del sistema de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas y lodos residuales.

105. Tan es así, que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el artículo 3 clasifica a la información pública en: I. Información pública de libre acceso, que es la no considerada como protegida, cuyo acceso al público es permanente, libre, fácil, gratuito y expedito, y se divide en: a) Información pública fundamental, que es la información pública de libre acceso que debe publicarse y difundirse de manera universal, permanente, actualizada y, en el caso de la información electrónica, a través de formatos abiertos y accesibles para el ciudadano, por ministerio de ley, sin que se requiera solicitud de parte interesada; b) Información pública ordinaria, que es la información pública de libre







apoyan en el acuerdo ello resulta intrascendente, pues lo cierto es que el Juez debía contrastar los conceptos de violación con los argumentos de la sentencia para calificarlos de fundados o infundados; pero, decir que son infundados solo porque son contrarios a lo que el mismo "ITEI" resolvió constituye un argumento circular que se aparta del análisis constitucional.

115. Cierto, deviene jurídicamente ineficaz, dado que el recurrente no reclamó en el juicio de amparo la inconstitucionalidad del acuerdo \*\*\*\*\* del "ITEI", a través del cual determinó que la "\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*" es un sujeto obligado indirecto, en el que, en parte, se basó el instituto responsable para emitir la resolución reclamada.

116. Por ello, desde luego que resulta trascendente que una porción de la resolución sujeta a escrutinio constitucional se sustente en el acuerdo referido, ya que no es factible aducir que no tiene importancia y que debió analizar los conceptos de violación sin tomar en consideración el acuerdo \*\*\*\*\* del "ITEI", puesto que su constitucionalidad no fue materia de análisis en el juicio biinstancial, dado que no fue señalado como acto reclamado.

117. Al respecto se comparte la jurisprudencia XIX.2o.A.C. J/16 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, de registro digital 173250, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, página 1482, de rubro y texto siguientes:

**LITIS CONSTITUCIONAL. SU DELIMITACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y, EN SU CASO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, TRATÁNDOSE DE ASUNTOS EN QUE OPERA EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO.** La materia de estudio que constituye el límite y la condición de la jurisdicción del Juez Federal en el

amparo indirecto, se constriñe al estudio de los razonamientos vertidos por la autoridad responsable en el acto combatido de que se trate, para sostener su sentido, a la luz de los planteamientos expresados por los peticionarios del amparo en su demanda, que tiendan a demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del mencionado acto reclamado; en tanto que en el recurso de revisión, la materia de la segunda instancia, se ciñe al estudio integral del fallo combatido, en vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes, que indefectiblemente deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones lógico-jurídicos contenidos en la sentencia que se recurre y no pueden ni deben comprender cuestiones diversas de su materia; de ahí que a través de ellos no sea factible introducir aspectos no controvertidos ante la potestad común ni las no expuestas en los conceptos de violación, porque implicaría alterar la litis constitucional.

**118.** Máxime, que en la sentencia recurrida se estableció que desde la emisión del acuerdo, el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco determinó la información que la asociación tercera interesada debería proporcionar, a efecto de cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues a dicho organismo se le otorga la facultad de establecer los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos.

**119.** Es **inoperante** el agravio “2.”, en donde el recurrente alega que en la sentencia se realizó una interpretación indebida de los artículos 23 y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8, 22 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (párrafos del 76 al 80 de la sentencia), para luego señalar lo establecido en los numerales 23, 70 y 81 (dijo no invocado por la responsable), porque con ello no se rebaten las

























147. Y debido a que los agravios anteriores fueron desestimados por jurídicamente ineficaces e inoperantes, el tercero de los agravios que depende de ellos deviene inoperante.

148. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia aplicable por analogía y que se comparte de epígrafe: "**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS**", reproducida en supra líneas.

149. Es jurídicamente **ineficaz** lo alegado en el agravio "4.", en el sentido de que en el párrafo 95 de la sentencia recurrida el juzgador señaló que no se combatió la consideración del "ITEI" en el sentido de que existía una colisión entre el derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales y realizó una ponderación para la entrega de los nombres, puestos y salarios de las personas que contribuyen en la prestación del servicio público concesionado, donde analizó la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, de la revelación de la información que se le requirió a la asociación tercera interesada; pero se equivocó, porque desde el momento en que fue materia de impugnación en la demanda de amparo el hecho de que la información solicitada es pública fundamental combatió esa parte de la resolución.

150. En efecto, se califica de ese modo, ya que si bien en la sentencia recurrida se aludió a la inoperancia por la razón antedicha, lo cierto es que tal colisión se analizó en la resolución reclamada y la responsable aplicó la prueba de interés público con base en los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, los que consideró colmados para llegar a la conclusión de que al aquí recurrente debían entregársele los nombres, puestos y salarios de las personas que contribuyen en la prestación del servicio público

concesionado; de ahí que la calificativa efectuada por el Juez de Distrito en ese tópico no tiene trascendencia.

**151.** El "5." de los agravios resulta **inoperante** por descansar en argumentos previamente desestimados.

**152.** En dicho agravio, el recurrente señala que resulta falso que no combatió las consideraciones de la responsable en el sentido de que solo procedía requerir a la tercera interesada para que entregara los nombres, puestos y salarios de los trabajadores dedicados a la prestación del servicio público concesionado, porque lo que es materia de controversia es precisamente que la obligación del sujeto obligado es entregar la información completa de su nómina y no solo la relativa al servicio de distribución de agua potable, que fue el núcleo del amparo.

**153.** Que, el concepto de violación que declaró inoperante el Juez se dirigió a demostrar los motivos por los que no se puede limitar la entrega de información solo al servicio de distribución de agua, ya que impediría que la ciudadanía corroborara su veracidad. Por tanto, la resolución es de nueva cuenta circular, pues desestima un concepto de violación que combate la decisión del "ITEI" señalando que no lo hizo.

**154.** Cierto, porque lo relativo al límite de la información a entregar se refiere a la información de debe entregar la "\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*", lo que ya quedó definido en el acuerdo \*\*\*\*\* en el que determinó que, para efectos del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, se le estableció como sujeto obligado indirecto, ubicándolo en el rubro de "Personas físicas o jurídicas que reciben recursos públicos o ejercen actos equiparables a los de autoridad" y respecto de dicho acuerdo



Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los diversos 8, fracción V, inciso m), 22, numeral 2 y 24, fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 5, 132, fracción V y 157 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco; los numerales 2, fracción XV, 3, fracción I, 8, 9 y 10, fracción I, 12, fracción V, 13, fracción III, 97 y 101 bis, de la Ley de Agua del Estado de Jalisco y sus Municipios; los preceptos 1.4, y 3.1, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, los que reprodujo.

**158.** Luego, precisó que de esas legislaciones se observaba que por información de interés público se entiende a la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, lo cuales deben proteger los datos personales que obren en su poder, que son cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y Municipal.

**159.** Que cada Estado de la República Mexicana contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas, entre otras, los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o,

en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.

**160.** También señaló que el organismo encargado de transparencia y acceso a la información, dentro de su respectiva competencia, determinará los casos y el listado en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

**161.** Que no se requiere autorización del titular de la información confidencial para proporcionarla a terceros cuando, entre otros casos, esté relacionada con el otorgamiento de estímulos, apoyos, subsidios y recursos públicos y sea necesaria por razones de seguridad estatal y salubridad general de competencia local, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, por lo que, para ese efecto, el instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.

**162.** El resolutor puntualizó que son sujetos obligados para proporcionar información las personas físicas o jurídicas privadas que recauden, reciban, administren o apliquen recursos públicos estatales o municipales, o realicen actos de autoridad, sólo respecto de la información pública relativa a dichos recursos y que para cuyos



168. Ante lo infundado, jurídicamente ineficaz e inoperante de los agravios, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida.

169. Por último, conviene destacar que no es obstáculo para lo anterior, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente ejecutoria, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto.

170. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción VIII, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, 85, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo, se

**RESUELVE:**

**PRIMERO.** Se **confirma** la sentencia sujeta a revisión; en consecuencia:

**SEGUNDO.** La Justicia de la Unión **no ampara ni protege a** **\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\***, contra el acto del Pleno del

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, consistente en la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintitres, dictada en el recurso de revisión **\*\*\*\*\***, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria.

ARLING JOYANISTA LOPEZ CAMACHO  
70164662016316466 32000000000000000000000000000000-4h.IT  
150526 1800000





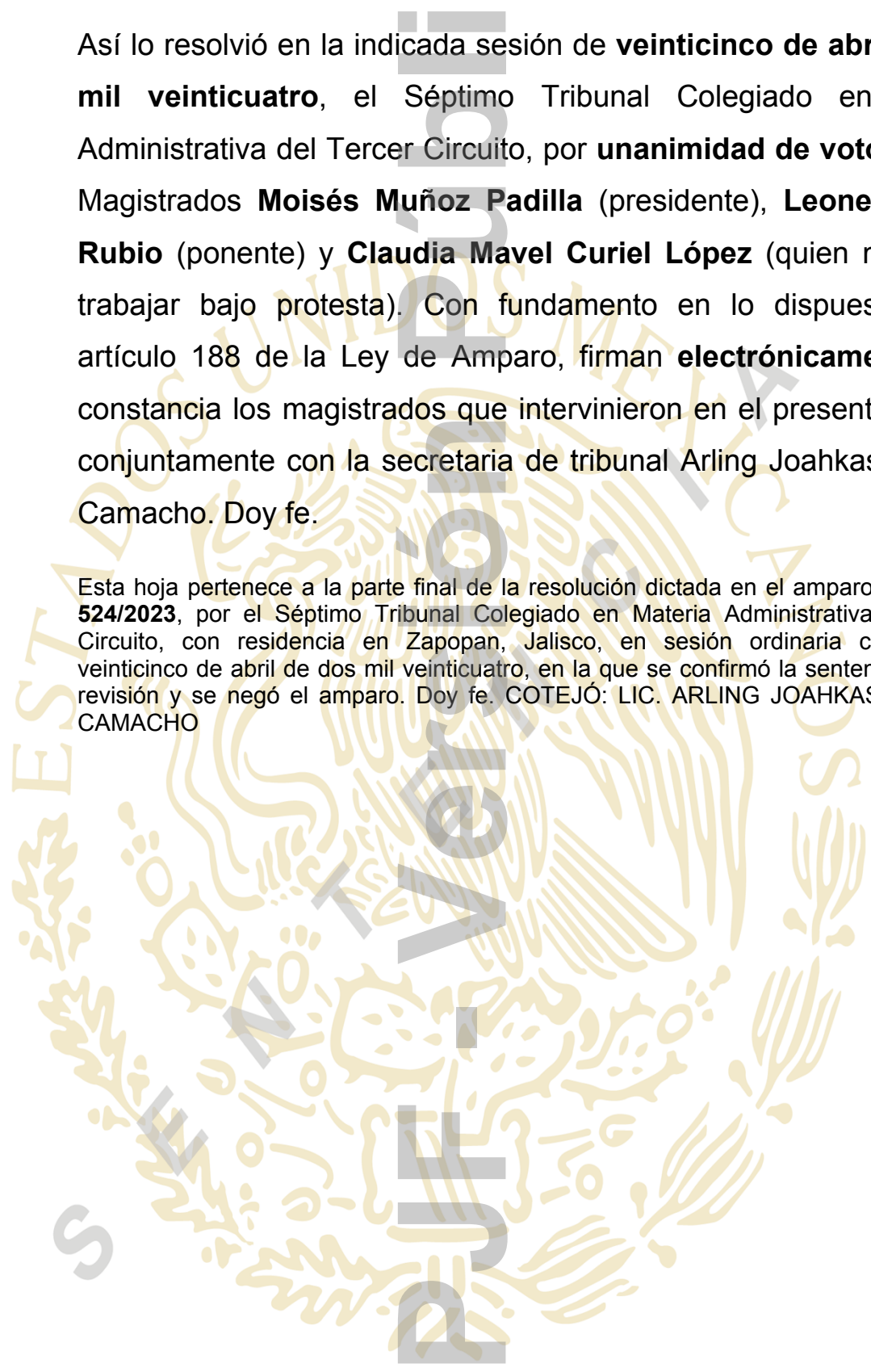
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**Notifíquese a las partes;** háganse las anotaciones correspondientes, envíese testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así lo resolvió en la indicada sesión de **veinticinco de abril de dos mil veinticuatro**, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por **unanimidad de votos**, de los Magistrados **Moisés Muñoz Padilla** (presidente), **Leonel Medina Rubio** (ponente) y **Claudia Mavel Curiel López** (quien manifiesta trabajar bajo protesta). Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley de Amparo, firman **electrónicamente** para constancia los magistrados que intervinieron en el presente asunto, conjuntamente con la secretaria de tribunal Arling Joahkasta López Camacho. Doy fe.

Esta hoja pertenece a la parte final de la resolución dictada en el amparo en revisión **524/2023**, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, en la que se confirmó la sentencia sujeta a revisión y se negó el amparo. Doy fe. COTEJÓ: LIC. ARLING JOAHKASTA LÓPEZ CAMACHO

ARLING JOAHKASTA LÓPEZ CAMACHO  
70f6a6620f636a66e32000  
1505226 1800000





## PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

### EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:  
81363325\_1887000033359565005.p7m  
Autoridad Certificadora:  
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal  
Firmante(s): 4

FIRMANTE				
Nombre:	ARLING JOAHKASTA LÓPEZ CAMACHO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.4b.1f	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	25/04/24 20:48:58 - 25/04/24 14:48:58	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	d6 a2 74 40 06 06 1b 5e 2e fc 7b 24 41 19 2d ab bc 07 5d 0c b8 a0 3f 01 a8 6f fc 6a a5 1c 70 ec f1 9e ae 2c ed 7a 31 0a 53 8e c5 76 2d e4 8b 2e b6 bb 94 ec 38 47 c3 0a bc 6b 9f 5b 63 c5 51 1b f2 f5 85 8c cd 8d 2e 51 95 6f e8 84 55 53 e4 a7 60 44 3e 0e ef 9f a7 4b d7 95 d1 43 da af e9 36 51 75 5d 58 0d ea 5f da 88 8d ae 86 c5 cd bd b1 03 5e a2 94 df 62 5e 64 c1 49 6a fe 5e 77 2a fe 7e 9c 22 c2 1d 9e 63 97 24 6c 2e d1 9f 28 5a c8 86 7c 0f 74 73 7d 75 5d 00 72 a0 7c e8 b9 13 4c 40 f2 11 70 a4 ca 7b ec 6b a1 a0 7f bb 8f ee c2 b5 76 00 27 bc 1a d6 6c c9 60 51 cd f9 ac 3a f6 45 e6 3d 21 ea 69 b0 db 2e ab 41 41 0f 9b 60 5f d4 12 83 14 c0 72 26 2a b5 fc 1f b6 4d 6c 17 15 b1 78 b4 7a ae 0d f5 5a 3b 29 e6 af 5a dd eb 30 7a 6f 82 d8 3f e7 02 00 7a 01 9f 0b db fe bc 08			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	25/04/24 20:48:58 - 25/04/24 14:48:58			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	25/04/24 20:48:59 - 25/04/24 14:48:59			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	129593374			
Datos estampillados:	sJANp6+PqxT3iLb83LnpUBZvz3I=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
<b>Nombre:</b>	LEONEL MEDINA RUBIO	<b>Validez:</b>	BIEN	Vigente
FIRMA				
<b>No. serie:</b>	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.57.c4	<b>Revocación:</b>	Bien	No revocado
<b>Fecha: (UTC/ CDMX)</b>	25/04/24 21:09:54 - 25/04/24 15:09:54	<b>Status:</b>	Bien	Valida
<b>Algoritmo:</b>	RSA - SHA256			
<b>Cadena de firma:</b>	d0 bf b4 0a fc 4e 64 ef 69 26 70 85 cc 9b 32 fc b4 cc 72 08 4e 83 e7 09 39 98 94 93 8f 1c 72 8c 4f e7 13 ab ba c0 45 db 5f 38 c6 77 3f 0a ed c9 bb ad 97 26 05 1f ca bd a3 3b 95 92 4b e7 ca 07 a3 c4 78 94 c9 31 b4 a3 fe 17 34 56 5c 51 00 ad 0b 2c 98 6e 73 e0 5e f0 81 08 f6 4f 7b fd 0a 9d 34 d3 fd d2 1d 24 f5 95 88 42 26 98 3f eb ba 6b f7 6f 36 92 70 5d 81 3b 71 31 96 58 73 f9 f9 b2 4f a1 51 e0 25 61 6f 41 2a f2 27 43 f2 c8 cd d6 72 f1 e3 e2 e8 f8 88 c8 e8 32 e4 89 7c d8 97 39 dc 16 09 df b4 e4 f6 6c 9c 75 f5 e3 00 34 a6 b8 7f 2c 22 84 0b d5 fd b9 c8 97 d0 7f 18 5a 55 24 70 5a 55 f7 ec 0a c0 51 1a b4 8a 61 21 f8 52 90 58 b9 58 81 69 3b 72 f0 14 47 49 3d 43 8c 47 45 bd dd 94 89 2c 52 62 18 0d 05 1b 9a e6 77 7b 08 12 d7 36 cc 7e 5c 7b 51 aa 10 c6 46 d4 a6 79 a0			
OCSP				
<b>Fecha: (UTC / CDMX)</b>	25/04/24 21:09:53 - 25/04/24 15:09:53			
<b>Nombre del respondedor:</b>	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del respondedor:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Número de serie:</b>	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
<b>Fecha : (UTC / CDMX)</b>	25/04/24 21:09:54 - 25/04/24 15:09:54			
<b>Nombre del emisor de la respuesta TSP:</b>	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del certificado TSP:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Identificador de la respuesta TSP:</b>	129617085			
<b>Datos estampillados:</b>	syJ4+ymXYSzjr9CSgYNZlZrsjck=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
<b>Nombre:</b>	CLAUDIA MAVEL CURIEL LOPEZ	<b>Validez:</b>	BIEN	Vigente
FIRMA				
<b>No. serie:</b>	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.39.97	<b>Revocación:</b>	Bien	No revocado
<b>Fecha: (UTC/ CDMX)</b>	25/04/24 22:04:59 - 25/04/24 16:04:59	<b>Status:</b>	Bien	Valida
<b>Algoritmo:</b>	RSA - SHA256			
<b>Cadena de firma:</b>	e4 06 4d 53 a7 c0 e7 66 39 46 ce 5e f3 b1 60 66 a3 e5 44 c1 fd 68 00 85 e9 a5 4c c8 1c 45 18 2f d7 34 00 41 72 a5 db 7b cb c3 ca a2 07 71 78 d3 92 8b 72 4e 95 8f 32 32 31 a4 fa b4 2e a1 ac e5 db 99 3b 6c d6 c9 d2 a2 4c 7b 92 cb c6 e6 f3 88 02 59 7d fc df dd 7f 28 12 69 ac 43 19 75 5d 02 20 72 12 03 1a 1a 06 e6 0c 20 1a 43 b5 05 a3 a9 5b 47 68 2c 60 80 72 5b e2 ca dd f0 36 ea 00 6a 68 d8 2a c9 6a 68 f4 50 64 9e c6 93 e7 bf bd a1 db 8d b6 b4 6b 7f 55 97 06 71 70 7e 6a 43 c4 33 cf c2 bf 1a c6 5a c1 a0 c0 03 4b d3 e1 03 c8 cc 4a ed d4 43 48 b3 a1 45 75 09 7f 67 e5 32 fb 64 b7 36 5a b9 50 87 dd 71 77 26 ae dd 2a 7e 93 82 55 8c 87 1d 6a a2 ac 30 03 17 9a ca 65 a4 02 2b 1d d9 4b a3 2c 2b fd 39 42 4c 08 8f d1 4f 2b 84 10 d5 9f 3c df 77 83 88 b1 3b 9c 06 eb cc 47 14			
OCSP				
<b>Fecha: (UTC / CDMX)</b>	25/04/24 22:04:59 - 25/04/24 16:04:59			
<b>Nombre del respondedor:</b>	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del respondedor:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Número de serie:</b>	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
<b>Fecha : (UTC / CDMX)</b>	25/04/24 22:05:00 - 25/04/24 16:05:00			
<b>Nombre del emisor de la respuesta TSP:</b>	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del certificado TSP:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Identificador de la respuesta TSP:</b>	129665230			
<b>Datos estampillados:</b>	KHTvwAv00DTbz/rwuo8XaKiAwDI=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
<b>Nombre:</b>	MOISÉS MUÑOZ PADILLA	<b>Validez:</b>	BIEN	Vigente
FIRMA				
<b>No. serie:</b>	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.31.8c	<b>Revocación:</b>	Bien	No revocado
<b>Fecha: (UTC/ CDMX)</b>	26/04/24 00:52:57 - 25/04/24 18:52:57	<b>Status:</b>	Bien	Valida
<b>Algoritmo:</b>	RSA - SHA256			
<b>Cadena de firma:</b>	8f ea 15 71 70 62 67 04 3e 3c 26 74 f6 57 40 01 cb e3 d2 5e 67 15 bf ae ed 5a db c6 44 54 c3 47 72 5b 6c 0f e2 95 8f 37 9f ba 19 3b 05 a2 75 94 f7 b4 52 f2 64 13 50 af 87 7d 94 c5 04 3c 80 81 86 39 58 48 e2 a9 e3 08 74 f5 dd 0b 8f b1 50 2a 8a d9 e8 60 62 ac b4 d9 f0 b9 4b 88 c9 16 5d 58 cd b4 87 85 d8 97 f5 b8 42 09 b1 b8 55 b3 08 9d 25 89 47 af 28 4f 27 cd 6d 42 9f 5a 40 08 58 8d 11 91 2c 3a ab 2f 14 71 1a 8e d9 f1 3e ba 99 a2 a5 03 69 56 57 50 d7 e2 9c 77 8d 51 27 ce 4f d1 45 f6 cd f4 89 3e 3b ff c7 95 fa bd 5f b2 34 f5 3f fb cd 0b b3 ea b0 2a f0 d8 a2 05 6d a6 fd ac a3 27 23 9e 06 ae 39 6a fe 45 9f 56 86 b6 43 08 bd c2 0e 39 4b f0 d5 6c 9b a3 e6 d8 7b 27 8c 1f 86 b6 d2 eb d6 7f 75 e2 0f ef 22 19 05 52 1d f8 f5 5f 5f 8e f6 3e 2d 84 99 84 6f 09 d7 9d 7c db			
OCSP				
<b>Fecha: (UTC / CDMX)</b>	26/04/24 00:52:56 - 25/04/24 18:52:56			
<b>Nombre del respondedor:</b>	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del respondedor:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Número de serie:</b>	70.6a.66.32.20.63.6a.66.6f.63.73.70			
TSP				
<b>Fecha : (UTC / CDMX)</b>	26/04/24 00:52:57 - 25/04/24 18:52:57			
<b>Nombre del emisor de la respuesta TSP:</b>	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Emisor del certificado TSP:</b>	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
<b>Identificador de la respuesta TSP:</b>	129767087			
<b>Datos estampillados:</b>	HyVgHTVxIGw3kLK2rLOo2AccBSI=			

El veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, la licenciada Arling Joahkasta López Camacho, Secretario(a), con adscripción en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, por tratarse de DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA.. Conste.

PJF - Versión Pública